

Juan Goytisolo

ESPAÑA Y SUS EJIDOS



HIJOS DE
MULEY-RUBIO

2003

La inmigración tercermundista en España

La inmigración política y social procedente de países ajenos al área europea y noratlántica ha sido en España un fenómeno relativamente nuevo. El subdesarrollo económico que afectó a la mayor parte de la Península hasta comienzos de los sesenta y el régimen de dictadura a que vivía sometido el país por aquella época no favorecían, desde luego, la instalación en nuestro suelo de individuos o grupos que, huyendo de la miseria o la tiranía, buscasen en tierra extraña el pan o la libertad. ¿Cómo iban a encontrar trabajo en España si regiones enteras de ésta se despoblaban a causa de la pobreza y el paro y más de dos millones de españoles se veían obligados a emigrar a los países más ricos del Norte? ¿A quién se le iba a ocurrir la idea sino a los cómplices de Batista y Trujillo, de acogerse al amparo de un gobierno como el de Franco cuando centenares de miles de españoles escapaban de él y conocían por su culpa las privaciones y amarguras del exilio?

Solamente al producirse el “milagro económico español”, a consecuencia de la gran ola turística e inversión masiva de capitales europeos y norteamericanos, dicha bonanza, conjugada con la paulatina falta de brazos originada por la sangría migratoria de obreros y campesinos a Europa occidental, debía poner en marcha, en el lapso de unos pocos años, una corriente inversa: los puestos de trabajo vacantes –esto es, los más duros y peor remunerados– pasaron a ser ocupados por una incipiente emigración árabe y africana.

En la mayor parte de los casos, dicha corriente inmigratoria se producía de forma clandestina, con la tolerancia expresa o tácita de las autoridades franquistas, los patronos y propietarios agrícolas disfrutaban así de una mano de obra sumisa y barata, enteramente sometida a su arbitrio. Sin documentación, sin protección sindical, sin seguros sociales, los inmigrados vivían –y viven desde entonces– en condiciones cercanas a la esclavitud, privados de toda posibilidad de defensa. Para los marroquíes, senegaleses o guineanos instalados ilegalmente en Cataluña o el País Vasco, este régimen esclavista constituía –constituye aún– la primera fase de un proyecto más ambicioso y difícil: el paso anhelado a Francia. Poco a poco el tráfico clandestino de árabes, portugueses y africanos se transforma en una actividad floreciente y bien remunerada. Los negreros, tras despojar a sus “clientes” de sus magras economías, los guían por senderos de montaña hasta la frontera pirenaica y los abandonan allí a su suerte. A veces, aquéllos son detenidos poco después por la gendarmería y devueltos inmediatamente a las autoridades hispanas; otras, extraviados en la nieve, perecen de frío o, salvados *in extremis*, sufren la amputación

de algún miembro. La prensa española solía silenciar hasta la muerte de Franco tales tragedias. En complicidad con negreros, explotadores y guías, cerraba los ojos ante esta nueva forma de esclavitud.

Paralelamente, la desaparición del dictador y el proceso de transición hacia la democracia convirtieron a España en uno de los polos principales de la emigración política latinoamericana. Desde principios de los setenta, habían buscado refugio en ella varias decenas de miles de ecuato-guineanos, fugitivos del régimen de genocidio y terror impuesto en la ex colonia española por el tirano Macías Nguema. A ellos debía agregarse poco más tarde una masa creciente de exiliados chilenos, uruguayos y argentinos, víctimas de los regímenes militares del Cono Sur. Dicha inmigración política, de un alto nivel técnico y profesional en la mayor parte de los casos, ha buscado, con mayor o menor fortuna, abrirse camino en unos campos y actividades en los que a causa de la dureza de la crisis que atenaza a España, la competencia es intensa y la xenofobia bastante común. Simultáneamente, una nueva ola de inmigrantes sociales de origen colombiano, centroamericano o filipino trata de introducirse en el mercado de trabajo en el momento mismo en que éste empieza a reducirse como una piel de *zapa*. El paro, la recesión, el retorno forzado de casi un millón de trabajadores españoles de los países del Mercado Común van a transformar pronto las perspectivas optimistas de una España convertida en la décima potencia industrial del mundo en un recuerdo nostálgico hoy, el índice español de paro es el más alto de Europa después de los de Turquía y Portugal: en algunas provincias de Andalucía rebasa incluso la cifra del 22 por ciento.

Las actuales condiciones generales de penuria y desempleo revisten, en el caso de la inmigración clandestina, caracteres dramáticos. Si dejamos a los inmigrados latinoamericanos de la clase intelectual o profesiones liberales podemos dividir a aquélla en tres grupos según la índole de su trabajo: las sirvientas o empleadas a domicilio; los obreros, principalmente en las empresas de obras públicas y ramo de la construcción, y los trabajadores del campo. Las primeras, originarias en su mayor parte de Filipinas, Centroamérica y las antiguas colonias portuguesas de África, sirven casi siempre clandestinamente, con la esperanza de reunir los ahorros necesarios para facilitar su emigración a los países de la Comunidad Europea: sólo algunas lo consiguen, y otras, atraídas con el señuelo de miríficos contratos, acaban por ser explotadas en los bares y salas de alterne, “institutos de masaje” y otros centros de prostitución más o menos encubierta. El número de inmigrantes que trabajan en el sector servicios, obras públicas y construcción parece haber disminuido gradualmente a causa del paro y una legislación proteccionista que ampara y privilegia a los autóctonos: hay con todo unos pocos millares

—en Madrid, Barcelona, País Vasco, costa de Málaga—, casi todos ellos en condiciones de ilegalidad que les obligan a abandonar el país cada tres meses para hacerse sellar el pasaporte “turístico” con una nueva entrada. Los que faenan en el campo se hallan concentrados en Cataluña, en especial en la comarca del Maresme, en donde se dedican al cultivo de patatas y claveles y son exprimidos sin piedad por los negreros, por carecer de permiso de residencia y contrato de trabajo. Como muestra la documentación reunida y publicada por el Padre Eugenio Fosch Centelles, de la Comisión Diocesana de Migración de Barcelona, los africanos —oriundos en su mayor parte de Gambia, Senegal, Nigeria y, a veces, de Marruecos— viven “en un estado de permanente inseguridad, con el miedo de ser sorprendidos en cualquier momento por la policía y ser devueltos a sus países de origen por no tener regularizada su situación en España. Su único “delito” es, no obstante, “el haber desarrollado actividades laborales que los españoles rechazan”. Los patronos les pagan a setenta pesetas la hora, les encargan las tareas más penosas y les obligan a cumplir jornadas agotadoras de quince y dieciséis horas.

No tienen ningún tipo de seguro de enfermedad y, en el caso de caer enfermos y no disponer de dinero, deben acogerse a la buena voluntad de alguna institución caritativa. Estos trabajadores africanos se muestran remisos a hablar por miedo a las represalias del patrono: cuando uno de ellos fue a quejarse a una central sindical de que aquél no le pagaba, el patrono declara “me amenazó de muerte, dijo que iba a matarme”. Las condiciones de alojamiento son pésimas: numerosos africanos viven en barracas e incluso en las chozas ocupadas antaño por el ganado. Como el sueldo es escaso y deben ahorrar para mantener a la familia, se alimentan de arroz hervido y no prueban casi nunca la carne. En algunas comarcas, las autoridades locales han adoptado medidas discriminatorias contra ellos: así, el Ayuntamiento de Manlleu envió hace dos años una circular a todos los patronos y explotadores agrícolas para que no admitieran en adelante a “personal inmigrado extranjero, especialmente norteafricano”: en la misma localidad, cumpliendo órdenes del Gobierno Civil, fueron expulsados ciento sesenta trabajadores marroquíes y argelinos por falta de la correspondiente carta de trabajo.

Esta situación de acoso legal favorece la eclosión de brotes racistas. Como confiaba un africano al periodista Josep María Fábregas, “el 50 por ciento de la gente nos mira con indiferencia, pero hay muchos otros, un 25 por ciento, diría yo, que nos mira de una manera francamente hostil”. Para colmo, la mayoría de estos inmigrantes no cuenta con ninguna protección por parte de los representantes consulares de las naciones de donde proceden: “Cónsul hubo —denuncia el Padre Eugenio Fosch— que hizo detener en su despacho a un súbdito del país por él representado porque no tenía dinero para el taxi que lo trasladó a su oficina”.

La situación de los inmigrados sociales latinoamericanos, filipinos, africanos y árabes no ha despertado por lo general –y ello es especialmente verdad tratándose de los dos últimos grupos– la atención de la clase política ni de las centrales sindicales. Si exceptuamos las intervenciones aisladas de un puñado de representantes locales de la UGT y Comisiones Obreras, de algunas personalidades religiosas y unos cuantos periodistas e intelectuales, la democracia española, abrumada con sus propios problemas, los ha ignorado completamente. A diferencia de Francia y otros países industriales, la sensibilidad a los problemas del Tercer Mundo es un fenómeno casi inexistente entre nosotros, la causa de los palestinos y afganos no moviliza a la opinión pública y los escritores apenas si se interesan por ella. Mientras el idioma común auspicia una modesta apertura a la dolorosa realidad del mundo hispanoamericano, la distancia mental existente entre Tánger y Algeciras es desdichadamente mucho mayor todavía que la que media entre París y, digamos, Camerún o Madagascar.

(1981)

